

# DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

## BOLETÍN BIMESTRAL

DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA  
PROGRAMA: "RELACIONES CIVIL - MILITARES"

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

ISSN No. 1390-3381

Año 6 - Julio / Agosto - 2009

36

## EN AMÉRICA LATINA, RETORNA LA SOMBRA DEL GOLPISMO MILITAR. EN ECUADOR, SIGUE PROCESO DE REFORMA A LA SEGURIDAD

*Bertha García Gallegos\**

El conflicto político de Honduras ha preocupado al hemisferio y demuestra que América latina no ha aprendido lo suficiente del pasado, como para solucionar sus problemas sin instrumentar a la fuerza militar. La Constitución hondureña dedica 30 artículos a la fuerza militar y uno a la Seguridad pública y dispone –Art. 274– la cooperación de las fuerzas armadas en "todas" las secretarías de estado, y misiones en el conjunto de sus actividades, incluyendo educación, salud, vialidad, reforma agraria y un larguísimo etcétera. El nacionalismo persistente y el escasísimo y aún superficial análisis acerca de las estructuras profundas que tejó el poder militar en toda América latina, en ausencia de un control civil, contrasta en la actualidad con el intenso afán de apurar las reformas de los caducos sistemas de seguridad, que no pueden ni entender, peor contener, los ingentes problemas y amenazas que se anudan en todas las ramas del crimen organizado y se esparcen por todo el tejido social.

En concordancia con lo anterior, en estos dos meses en el país se sigue destacando el tema de la elaboración de la nueva Ley de Seguridad del Estado, con secretismos entre bastidores parecidos a los del pasado. Ahora los bastidores han correspondido a los funcionarios del régimen. Poco se puede saber de donde vienen los designios; aunque es preciso reconocer que la mesa correspondiente a la Comisión Legislativa ha puesto su empeño para discutirlos con alguna apertura a la comunidad. También los medios de comunicación, especialmente periódicos y programas radiales, han hecho su parte en la discusión diaria de lo que se ha podido entrever.

Ante la magnitud de los acontecimientos –el crimen organizado, sus nexos con el narcotráfico y la política, además de su paulatina extensión hacia el interior del territorio nacional– no podemos dejar de pensar que durante mucho tiempo el Ecuador perdió valiosísimas oportunidades para reestructurar sus sistemas de seguridad antes que fueran desbordados por la realidad. Estériles forcejeos de poder para mantener espacios; Libros Blancos de la defensa elaborados en las

## CONTENIDO

### EDITORIAL

EN AMÉRICA LATINA, RETORNA LA  
SOMBRA DEL GOLPISMO MILITAR. EN  
ECUADOR, SIGUE PROCESO DE REFORMA  
A LA SEGURIDAD

PÁG. 1

LAS ESTRUCTURAS ACTUALES DE  
SEGURIDAD FUERON PENSADAS PARA  
UN MUNDO QUE YA NO EXISTE

*Félix Arteaga.*

PÁG. 2

MÉXICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO ¿EL  
CASO DE UN ESTADO FALLIDO?

*Raúl Benítez Manaut.*

PÁG. 3

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA  
FRONTERA NORTE DEL ECUADOR

*Miguel Carvajal.*

PÁG. 5

EL PROYECTO DEL GOBIERNO SOBRE  
SEGURIDAD PÚBLICA NO ES  
DEMOCRÁTICO

*Dr. Juan Pablo Aguilar.*

PÁG. 6

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES:  
SOBRE UN GOLPE DE ESTADO

*Leticia Salomón.*

PÁG. 8

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD  
PÚBLICA Y CIUDADANA

Julio - Agosto 2009

PÁG. 9

sombras —cuyas discusiones públicas fueron pura utilería. Determinaciones estratégicas ancladas en visiones de Seguridad que ya no corresponden. El abandono total a la Policía a la que se ha culpado más allá de la certeza de sus errores —vinculada desde siempre a un Ministerio de Gobierno que ni tenía una Subsecretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Visiones localistas de la Seguridad Pública y ciudadana que no asumían la movilidad y extrema capacidad camaleónica de la delincuencia. Todas estas son determinaciones que ahora nos han pasado la cuenta.

Frente a ello, todos los esfuerzos son bienvenidos, pero el gobierno debe esforzarse por tener una visión más inclusiva y más doctrinaria de la situación. No puede mirar con el mismo lente de las Fuerzas Armadas y la Policía. Por más que estas visiones —sobre todo cuando son profesionalizadas— son indispensables y valiosas, ellas son, por su misma naturaleza, instrumentales. Mientras que las del gobierno deberían ser más orgánicas y doctrinarias.

\* Directora Programa DSD

## LAS ESTRUCTURAS ACTUALES DE SEGURIDAD FUERON PENSADAS PARA UN MUNDO QUE YA NO EXISTE

**Félix Arteaga\***

Trabajo fundamentalmente para una organización, el Real Instituto Elcano, que se dedica a buscar ideas nuevas en el campo de seguridad y defensa. Dentro de ese campo del que soy responsable, tratamos de explorar qué es lo último que ocurre, qué están haciendo los demás, qué nuevas formas de organización o de problemas están suscitándose y cuáles son las últimas tendencias, ideas o conceptos se producen en el mercado —globalizado— de las ideas. Otra parte de nuestro trabajo consiste en analizar si son o no aplicables esas ideas a las instituciones y problemas con los que trabajamos.

Por eso, me gustaría resaltar que las ideas que expongo a continuación son las que se están imponiendo en Europa y eso no quiere decir que vayan a acabar imponiéndose aquí, pero me parece importante informarles de nuestros cambios. Empezamos constatando dos evidencias en el entorno europeo: uno es que el mundo para el que hemos construido herramientas de seguridad y defensa está desapareciendo muy deprisa y, dos, que todavía no disponemos de los instrumentos para hacer frente a la nueva problemática de seguridad que actualmente tenemos. Europa tiene un proceso histórico de cambio e integración muy acelerado y su contexto de seguridad y defensa cambia muy deprisa. Los cambios se afrontan como retos: hay que adaptar las instituciones, las organizaciones y los conceptos continuamente aunque funcionen bien, lo que no es fácil porque hay una resistencia a la transformación continua, pero al mismo tiempo los cambios nos dan oportunidades para cambiar lo que no funciona. Las estrategias nacionales de seguridad que están apareciendo en Europa son causa y efecto de los retos y oportunidades señalados en el contexto europeo y, puede ser que no acaben llegando a afectar a otros países o regiones pero nunca se sabe si nuestra experiencia servirá de ayuda para afrontar sus propios retos y oportunidades de seguridad.

¿En qué consisten las estrategias nacionales de Seguridad? Las sociedades europeas hemos llegado a la constatación de que la supervivencia del Estado no está en grave peligro a pesar de los riesgos actuales. Ni los ataques terroristas de Londres o Madrid han puesto a los Estados británico y español en riesgo de supervivencia ni se ha identificado ninguna fuente de riesgo que pueda hacerlo. También hemos llegado a la constatación de que la seguridad de nuestros ciudadanos, su seguridad individual en lo educativo, en lo laboral, en la salud y en la seguridad, entre otros aspectos de la seguridad humana, no está en peligro. Y está la constatación de que tanto el Estado como el individuo gozan hoy de una protección razonable en los países europeos, con algunas diferencias, nos permite expresar que, en las condiciones actuales lo que verdaderamente preocupa en materia de seguridad, es ese espectro de nuevas "inseguridades" que hay entre lo que es la defensa del Estado, la defensa/seguridad nacional, y lo que es el orden público que afecta individualmente a los ciudadanos, lo que antes se definía como "seguridad interior".

Nos hemos dado cuenta que entre lo que es la defensa del Estado y lo que es seguridad individual del ciudadano hay un espacio creciente de problemas que afectan seriamente al bienestar, la salud o la protección de grandes sectores de la población. Son problemas que tienen una difícil solución, y que no encajan perfectamente en unas estructuras de seguridad que estaban pensadas para un mundo que ya no existe. Y eso es lo que nos ha obligado a introducir las como Estrategias Nacionales de Seguridad.

Las Estrategias Nacionales de Seguridad sirven para dar respuestas a problemas como el terrorismo internacional, el crimen organizado, la crisis debida a catástrofes naturales, las intervenciones en Estados que fallan en nuestro entorno, problemas como migración sin control, las pandemias, los tráfico ilícitos, el medio ambiente y un largo inventario de problemas nuevos o que no han tenido hasta ahora la atención debida. Ese espacio de seguridad que estamos definiendo cobra importancia en Europa porque creemos que ese es el escenario de seguridad para los próximos años. Si antes nos preocupaba lo que pudiera pasarle al Estado y al individuo, ahora tenemos que preocuparnos de problemas que trascienden a los anteriores y afectan a grandes sectores de ciudadanos o de intereses sociales. Tenemos por tanto un problema de seguridad distinto del que teníamos antes.

En este mundo nuevo, no hay diferencia entre la seguridad interior y la seguridad exterior, solo hay lo que llamamos "seguridad" y es un espacio continuo que no tiene separación entre lo "interior" y lo "exterior". Nuestros policías operan dentro y fuera de Europa; nuestros militares participan dentro de Europa en apoyo a operaciones de la policía con ocasión de emergencias o catástrofes, de grandes concentraciones deportivas o controlando nuestra fronteras exteriores. Cada vez que se reúnen nuestros jefes de Estado y de Gobierno en una ciudad, se pone en marcha un plan de emergencia en el que participan fuerzas armadas, fuerzas policiales, fuerzas locales y se despliegan misiles, fuerzas aéreas y unidades antiterroristas lideradas por autoridades civiles y esos son nuevos escenarios que antes no existían.

En esta seguridad vemos que, a diferencia de la defensa donde había un enemigo, ahora tenemos una combinación de todos ellos. Cuando antes deteníamos un contenedor en las fronteras europeas, lo que preocupaba era si pagaba o no el impuesto debido, un problema de seguridad fiscal. Ahora en esos contenedores pueden aparecer armas, emigrantes, mercancías ilícitas, armas de destrucción masiva, lo que ustedes quieran o una combinación de los anteriores. Y eso representa un nuevo tipo de problema sobre los que no estamos acostumbrados a lidiar, porque antes cada sector de seguridad se ocupaba de un problema concreto y ahora que los problemas son multidimensionales no sabemos bien cómo cooperar con los demás sectores. Antes, los agentes de aduana perseguían al delito fiscal, los agentes de policía perseguían al delito criminal, la guardia costera los delitos marítimos. Ahora lo que vemos que la seguridad individual y la seguridad del estado están mezcladas. Lo estamos viendo en las costas de Somalia

y del Golfo de Aden, un laboratorio de seguridad donde las redes que asaltan buques mercantes o pesqueros tiene conexión con traficantes de armas y están vinculados a grupos regionales que siempre han vivido del contrabando y del tráfico ilícito y que desarrollan mecanismos de inteligencia en colaboración con grupos de crimen organizados a los que hay que añadir el intento de al-Qaeda de asentarse en Somalia para continuar hostigando a Occidente. Hoy debemos adaptarnos a escenarios como ese nuevo donde tenemos que enviar fuerzas navales, agentes de inteligencia, representantes diplomáticos y agentes judiciales para afrontar un problema con dimensiones políticas, jurídicas, económicas, militares, policiales y muchas otras.

Las culturas de seguridad, que hasta ahora podían sobrevivir y desarrollar su trabajo independiente de forma autónoma, tienen, en Europa, sus días contados porque hoy en día se necesita una colaboración entre todos. Los Estados europeos tienen cada vez más problemas de recursos para atender sus necesidades de sobrevivencia y eso obliga a buscar economías de escala mediante la integración. Tenemos, como todos los países, otras prioridades distintas de la seguridad y las sociedades que se sienten seguras como las europeas tienden a subestimar el mantenimiento y cuidado de sus estructuras de seguridad, por lo que ahora que surgen nuevos problemas de seguridad se encuentran con falencias de gestión y, sobre todo, de recursos humanos. Esas vocaciones antes alimentaban a las fuerzas armadas, nuestra policía, nuestras fiscalías y nuestros sistemas penitenciarios se han visto marginadas por otras profesiones que no tienen que preocuparse por los demás ni vivir de cerca las dificultades de oficios que pierden valoración y apoyo social. Hoy esos recursos cada vez son más escasos y hay que sacarles mucho más provecho. No hay más remedio, decimos, que establecer una cultura nueva de integración de recursos humanos y materiales, una cultura de integración que es algo más que la cultura de cooperación y esta es una constatación que viene al pensar en las estrategias nacionales de seguridad.

Hay ciertas tendencias sociales compartidas, con pequeñas variaciones, en Europa. Primero, las cuestiones tradicionales de seguridad y defensa ya no son tan importantes para los ciudadanos como antes. Esto es algo objetivo y no hay más que leer las encuestas o los programas electorales para comprobarlo. Por un lado, en una sociedad avanzada como la europea donde la percepción de los ciudadanos es que su Estado no corre ningún riesgo vital, éstos tienden a desentenderse de la defensa, de lo militar y, en último caso, admiten su necesidad

para defensa o auxilio de otros. Pero no solo la defensa está perdiendo cotización social también lo está todo lo relacionado con lo exterior, con la diplomacia, con las relaciones internacionales. Las sociedades europeas viven en un mundo globalizado y saben lo que pasa afuera (globalización) pero les cuesta más darse cuenta de que lo que pasa ahí fuera de la mano de la globalización les afecta personalmente (globalismo). Poco a poco se va abriendo paso que fenómenos que ocurren fuera como el crimen organizado o el deterioro medioambiental van afectando al bienestar de grandes capas de la sociedad y, ahí sí que se nota un progresivo incremento de la preocupación. Un auge de la preocupación por la seguridad que no es sólo por la seguridad pequeña, inmediata y próxima de los ciudadanos individuales sino por la percepción de que hay problemas que ni los militares ni los policías pueden solucionarles. Por ejemplo, la percepción, el movimiento, el auge que toma las tramas del crimen organizado, es algo que los ciudadanos empiezan a ver que los Estados no saben controlar y los partidos políticos tampoco.

Los temas de seguridad y defensa tradicionales ocupan muy poco espacio en los programas electorales, en los programas de los partidos y en los medios de comunicación. Sin embargo, poco a poco va aumentando el espacio que dedican a la seguridad que afecta a las sociedades, a problemas de los que los ciudadanos toman conciencia y eso, en sociedades democráticas, tiene un necesario efecto sobre las prioridades oficiales. La seguridad y la defensa que antes manejaban los gobiernos mediante los Gobiernos y las Administraciones específicas, hoy en día se definen políticamente como una agenda en la que tienen entrada las peticiones de los ciudadanos.

Ahora son los ciudadanos quienes también dicen a los Gobiernos: mi problema de seguridad es éste, atiéndamelo. Esta construcción social de las prioridades obliga a los Gobiernos a tomar interés por cuestiones que antes sólo eran un problema de seguridad si así lo definían las culturas de seguridad y defensa oficiales. Ahora las agendas son compartidas. Los ciudadanos imponen en las agendas las nuevas prioridades, un fenómeno que ustedes conocerán como el de "segurización" de las agendas y por el cual entran en la celda de la preocupación oficial nuevas cuestiones que antes no existían y, también es importante, salen cuestiones de seguridad o defensa que antes se consideraban como problemas a tratar

*\* Investigador principal del Instituto Real Elcano de España.*

## MÉXICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO ¿EL CASO DE UN ESTADO FALLIDO?

**Raúl Benítez Manaut\***

Desde fines de 2008, observadores académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA han hablado de México como de un "Estado fallido", fracasado, al borde del caos. Se da a entender que el gobierno ha perdido el control de la situación, las mafias del crimen organizado se han apoderado del Estado a través de la corrupción, y la población ha perdido la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes recurriendo a la autoprotección. En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en el 2008, así como por la reaparición de los secuestros de alto impacto. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas concernientes a la narco corrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado (Procuraduría General de la República (PGR), INTERPOL México, Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En general, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un

Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. El último recurso de un Estado, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica. ¿Cómo se llegó a tal situación? En este artículo exploramos algunas de sus causas.

**1. Nadie se ocupó de la reforma del sistema de seguridad.** La transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, antes un poder paralelo y oculto, se ha convertido en una descarnada lucha de poder entre carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad. La inseguridad se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas

socioeconómicos repercuten en la seguridad y la gobernabilidad, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos incluye la trata de personas; las violaciones de los derechos humanos. Crece la transnacionalización del crimen, el tráfico de armas desde EEUU y el fenómeno de las maras, que provienen de América Central y California golpeando a la sociedad.

La falta de atención a los temas de la seguridad, la defensa y la justicia, durante la transición a la democracia en México, generó notables inconsistencias y ha impedido la reforma de ciertas estructuras. Ninguna fuerza política incluyó este tema en su agenda, ni en la profesionalización de los servicios de inteligencia. Quedó en el olvido la reforma de las estructuras policiales. Coexisten en México más de 1.600 corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) bajo un sistema legal que genera atomización, falta de profesionalidad y corrupción. Por ello, el crimen organizado tiene una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción.

**2. Los problemas de seguridad de los Estados Unidos impactan en la seguridad mexicana.** La situación creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 definió la política de seguridad de México. En la década de 1990, la relación México-EEUU pasó sin grandes tensiones del esquema de la Guerra Fría al de la Posguerra Fría, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el motor de ese ajuste. A partir de los atentados, la tensión en las relaciones internacionales afectó a México en forma directa. En la confusión reinante se especuló que los terroristas habían ingresado por las fronteras terrestres de Canadá o de México. En forma abrupta, México junto con Canadá, por su condición de vecinos, fueron los primeros países en ser requeridos para cooperar contra el terrorismo.

La estrategia estadounidense abarcó: la protección de la patria (*homeland security*) y la estrategia de acción preventiva contra el terrorismo (*preemptive action*). Dado que la colaboración de México y Canadá era vital, muy rápidamente se firmaron los acuerdos gubernamentales de fronteras inteligentes –con Canadá en diciembre de 2001 y con México en marzo de 2005. Pero México no respaldó el esfuerzo de Washington para involucrar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la guerra contra el terrorismo. Por ello, desde el 11 de septiembre se vio en la necesidad de dividir sus relaciones con EEUU. Mientras la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General y los sistemas de inteligencia cooperaron con sus contrapartes estadounidenses en el plano de la seguridad interna; se produjo una notable tensión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su oposición a la estrategia contra el terrorismo, a la campaña de Irak y a la creación del Comando Norte de Estados Unidos en 2006. Esto acentuó las diferencias entre las élites políticas mexicanas, los globalistas y los nacionalistas.

**3. La falta de control del tráfico de armas; alimento de los carteles.** En México –como en EEUU, Colombia y algunos países de Oriente Medio y África, la cantidad de armas en manos de la población ha quedado totalmente fuera de control y ha sido el alimento principal tanto del crimen común como del crimen organizado; conforma un enorme mercado negro que se nutre también de armas provenientes de Guatemala –donde su comercio es legal– y otros países de Centroamérica. El control de las armas en México, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es deficiente y existe una gran facilidad para cruzar ambas fronteras –la de México-EEUU y la de México-Guatemala–, por la ausencia de un control efectivo en el sur de EEUU y los intereses de los comerciantes guatemaltecos. Organizaciones estadounidenses de enorme peso, como la Asociación Nacional del Rifle, boicotean las iniciativas regionales para regular y controlar el tráfico de armas ligeras.

**4. La inseguridad pública.** El crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito. Los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población que exige el fin de la corrupción, y por los carteles que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares se encarguen del trabajo de la policía. A inicios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran conducidos por militares, sin que ello haya demostrado una mayor eficiencia en la reducción del delito. La dispersión de las fuerzas de seguridad es clara. Existen en México 1.661 corporaciones policiales. En 2008 existían casi 340.000 policías distribuidos entre policías municipales, estatales y federales. Cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, en 2000, casi la mitad de la Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República estaba conformada por militares. Una importante reforma policial implementada durante el gobierno de Fox fue la transformación de la PJJF en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la erradicación de los policías de la AFI que tenían cargos penales y que en 2001, eran el 7,61%.

En México los delitos se dividen entre el fuero común y el federal. En el primero se incluyen aquellos que afectan a la población: robo, homicidio, violación, secuestro y fraude. En total, suman más de 90% de la actividad delictiva. El resto corresponde al crimen organizado. Junto con la creciente participación de militares, el debate sobre la inseguridad está dominado por las estrategias de mano dura. Sin embargo, la mayoría de los análisis coincide en que la mano dura no constituye una solución efectiva al crimen común; más bien se identifica con el empleo de las Fuerzas Armadas, con la impunidad y con posibles violaciones a los derechos humanos.

**5. El narcotráfico en guerra contra el Estado.** Así como el crimen común constituye la principal amenaza a la población, el narcotráfico es la principal amenaza al Estado. Ello se debe a que el crimen organizado le disputa espacios de poder y el ejercicio legítimo de la fuerza y está construyendo un poder paralelo basado en el terror, el asesinato y el control territorial. Desde la década de 1930, cuando se consolidó el régimen de la Revolución, una característica del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas fue el desarme de los grupos alzados en armas, locales y estatales, en un proceso de desfeudalización del ejercicio de la violencia. Hoy comienzan a verse los primeros signos de refeudalización, en manos de los siete principales carteles de la droga que operan en el país.

El narcotráfico es un fenómeno con una larga historia en México en sus variables de producción, tráfico y consumo de marihuana y amapola. Pero lo que transformó el tráfico de drogas en un crimen de alto impacto, con creciente repercusión social, fue la incorporación del país a las rutas de tráfico de cocaína proveniente de los Andes. Aunque el inicio de este proceso data de la década de 1970, fue a partir de los años 90, con el desmantelamiento de los carteles colombianos de Medellín y Cali, cuando comenzaron a consolidarse las organizaciones narcos mexicanas como factores de poder real en el país. Estas verdaderas empresas transnacionales lograron construir emporios del comercio de cocaína que se produce en Colombia, se transporta a través de corredores aéreos, marinos y terrestres, y se consume en EEUU. Las estructuras municipales y estatales están colapsadas, entonces solo queda el gobierno federal. El combate al narcotráfico abarca prácticamente todo el gabinete de seguridad. Debido al crecimiento del delito, hoy participan en forma directa siete dependencias federales: la Sedena; la Secretaría de Marina con sus unidades de inteligencia para interceptar el tráfico por el Pacífico; el Sistema Federal Penitenciario; la Secretaría de Salud, para el combate contra las adicciones y el consumo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente contra el lavado de dinero, a través del Servicio de Administración



Tributaria; y la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En la actualidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores administra los recursos de la Iniciativa Mérida.

El enorme esfuerzo de las estructuras del Estado para combatir al narcotráfico se explica, como ya se señaló, por la expansión de esta actividad en los últimos años. Su crecimiento y sus efectos cada vez más violentos tienen varias causas, como el incremento del consumo en EEUU y el ingreso de México en la ruta de la droga proveniente de Colombia. También resulta clave la guerra sin precedentes entre los carteles por el control de las plazas: las ciudades en las que se almacena la droga y las carreteras que conectan el norte del país con los puntos de ingreso, las costas y las fronteras con Guatemala y Belice. Los puntos más importantes para la entrada de la cocaína proveniente de Colombia son las costas del Pacífico sur, en Oaxaca y Guerrero, y la península de Yucatán y Veracruz, para la droga proveniente de Venezuela y Brasil. El tránsito por tierra, entra por el Petén, Guatemala. La PGR registraba para el 2005 siete grandes carteles: Tijuana, del Golfo, Juárez, Sinaloa, Pacífico, Oaxaca y del Milenio 32. Hacia 2008 se consolidó un nuevo cartel, desprendimiento del cartel del Golfo, llamado "La Familia", extremadamente sanguinario, con penetración hacia el Pacífico. Los territorios en disputa se ubican en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, donde se registran los más altos niveles de violencia, precisamente por ser áreas peleadas por los diferentes carteles. El narcotráfico ha causado una especie de estado de terror en el que tanto la acción de los carteles como las estrategias del gobierno han generado espirales de violencia.

Una de las estrategias del gobierno federal consiste en realizar operativos militares. Durante el gobierno de Fox, el más importante operativo, "México Seguro", junio de 2005, Nuevo Laredo, removi6 a 700 policías

locales comprometidos con el narcotráfico. La estrategia ha sido cuestionada porque el ejército tiene una limitada capacidad de despliegue y solo puede destinar fuerzas de manera temporal; cuando las retira, los carteles recuperan el control del lugar.

**Conclusiones.** En América Latina, el debate sobre la seguridad ha pasado de las tradicionales amenazas estatales a las nuevas amenazas. Así, la agenda de seguridad mexicana incluye nuevos temas y también percepciones distintas acerca de cómo enfrentar las nuevas amenazas. Dos temas nuevos son el terrorismo y la migración, introducidos por presión de EEUU, principalmente después del 11 de septiembre. Desde siempre, la migración ha estado vinculada a la seguridad nacional en todos los países, tanto para favorecer el ingreso (como ocurrió en EEUU durante el siglo XIX y la primera mitad del XX) como para contenerla (tendencia presente desde los 80). Desde la década de 1980, EEUU reconoce la vulnerabilidad de sus fronteras terrestres, principalmente la frontera Sur. Pero para México también su frontera sur es un asunto de seguridad nacional, por las guerras civiles que tuvieron lugar en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En la década de 1990, una vez pacificados esos países, la problemática de seguridad se enfoca en el aumento del tráfico de personas, armas y drogas. Las maras aprovechan esta debilidad y convierten la delincuencia asociada a sus estructuras en una amenaza transnacional. La corrupción de los responsables de la seguridad de México impide el éxito de las estrategias del gobierno. En el caso de la cooperación con EEUU, la Iniciativa Mérida podría implicar un cambio muy importante en la guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico. Todavía es prematuro para saber si el gobierno de Barak Obama modificará la relación con México en materia de seguridad y defensa.

\* *Politólogo, Investigador principal del Centro de Estudios de Seguridad de la UNAM.*

## LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR

**Miguel Carvajal\***

En las cinco provincias de la frontera norte ecuatoriana —Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbios y Orellana— se han concentrado en los últimos años distintos niveles, causas, características de problemas de Seguridad y Defensa. Pero este no es un problema reciente. La incidencia de los grupos irregulares en la zona data de hace muchísimos años. Quizá en estos dos últimos años lo que hemos logrado es poner los hechos sobre la mesa para discutirlos y tratarlos de una manera abierta. Muchos de ellos tienen que ver con un hecho ineludible, que es la poca presencia, el poco control territorial del Estado Colombiano o el poco control por parte de las unidades militares colombianas sobre fuerzas irregulares como la de las FARC o las del ejército de liberación nacional o las disputas que entre ellos existen con los grupos que quedan de las autodefensas unidas, AUC.

Cuando realizamos operaciones militares en la zona de frontera, cuando se destruyen laboratorios de cocaína o cuando tenemos patrullajes, muchas veces lo que encontramos al frente del territorio ecuatoriano son grupos irregulares. Hace unos diez meses en la zona de Tobar Donoso, entre las estribaciones de Carchi al Esmeraldas, encontramos un laboratorio de procesamiento de cocaína muy importante. Mientras se destruían esos laboratorios por parte del personal del ejército ecuatoriano, teníamos al frente en el lado colombiano, un grupo armado uniformado de aproximadamente unas 30 personas que veían cómo se realizaba toda la operación. Esto es importante porque significa que el problema que tenemos allí es un problema cuya resolución

no es a corto plazo. Hemos reconocido las dificultades militares que puede enfrentar el Estado Colombiano pues se trata de grupos que están en guerra desde hace 50 años o mas; pero debemos perseverar en la insistencia del control que tienen que tener en su territorio y en lo que tiene que ver con nosotros en su frontera sur.

Otro elemento que tiene que ver con la inseguridad de la frontera es el desarrollo de una economía informal, ilegal, dentro de la que está articulada la población de la zona resultante de la falta de trabajo o de salarios adecuados. Los campesinos no se vinculan a actividades ilícitas porque quieren; sino porque les resulta una mejor opción en los ingresos y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, no es solo un problema de solución militar y policial; aquí hay un problema de economía regional de carácter ilegal. Esa economía está vinculada a varias actividades igualmente ilícitas; entre ellas el tráfico de armas. Tenemos el tráfico de Perú hacia Colombia —el Ecuador es un punto intermedio. Existe un problema de tráfico de armas en Esmeraldas, Sucumbios y en menor medida en Carchi. Todo ello porque existe un conflicto armado en Colombia.

Por otro lado, hay un tráfico de combustibles sobre todo por vía marítima y vía terrestre. Tenemos un plan de soberanía energética, sin embargo la diferencia de precios de diesel, de gasolina, de gas, es evidentemente una condición que favorece el tráfico de combustible subsidiado desde Ecuador hacia el consumo colombiano. Otro factor muy fuerte es la presencia del narcotráfico y esto significa la existencia de corredores de narcotráfico que sacan la droga procesada. Tenemos

cerca de treinta mil hectáreas de cultivos de coca en territorio de Colombia al frente del Ecuador y en el cultivo y procesamiento hay muchas personas del lado ecuatoriano, colombianos que viven en el Ecuador, colombianos que viven en Colombia o ecuatorianos que eventualmente pueden vivir en Colombia que se dedican a las actividades de raspado de la hoja de coca o a las actividades propias de su procesamiento en los laboratorios. Un jornalero que trabaja en plantaciones de palma ganará alrededor de unos 200 dólares al mes; en cambio los cultivadores de coca o los raspadores pueden ganar el doble. Evidentemente a esas personas no les interesa mucho si esta trabajando en un cultivo lícito o ilícito; les interesa cuánto puede ingresar mensualmente para el consumo de su familia. Este problema explica el hecho de que muchas de las áreas civiles estén articuladas sea a los grupos delincuenciales, sea a los grupos de narcotraficantes o a los propios grupos irregulares que se confunden en estas actividades, y evidentemente eso plantea igual que en el tema anterior un problema estructural muy difícil de resolver.

Estas actividades producen efectos a lo largo de la zona de frontera. Una de las áreas más críticas es la zona norte de Esmeraldas, donde enfrentamos fuertemente con la Policía y las Fuerzas Armadas, áreas extensas en las que la inseguridad es dramática. No puede ser que en ciudades como San Lorenzo, los colegios nocturnos, cualquier institución, tengan que cancelar sus actividades de seis y media a ocho y media de la noche, porque no se brinda las condiciones de seguridad para los chicos que salen del colegio. Existen desde hace por lo menos diez años bandas armadas, organizadas, con un importante poder de fuego, que actúan en San Lorenzo, en la zona del río Cayapas, en Borbón, en la zona de los manglares. Los grupos armados se dedican a delinquir, retoman el nombre de las autodefensas colombianas: astros rojos, águilas negras. Existen secuestros, narcotráfico, bandas delincuenciales que tiene el control de ciertas áreas, pero este es un problema cuya resolución sí está en manos de los ecuatorianos. Aquí no dependemos ni del control territorial que debe ejercer el Estado colombiano; es un problema que está dentro del territorio ecuatoriano, evidentemente vinculado a los problemas que existe en Colombia pero que nos compete.

Pero el problema de seguridad no está únicamente en el área del norte de Esmeraldas, o la zona de frontera, sino que afecta de manera integral al resto del país. Los circuitos del narcotráfico también operan en la zona de Quindindé, hacia las costas de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Existen circuitos que los vinculan hacia Quito, Guayaquil, y vuelven a Sucumbíos. Son problemas que requieren un enfrentamiento drástico y completo por parte de todas las autoridades e instituciones que tienen que ver con la seguridad: las fuerzas armadas, a la policía, a la Fiscalía, a los jueces, a la administración de Justicia.

Evidentemente estamos cosechando el desarme institucional del Estado en tanto tiempo. Sobre todo en la falta de eficacia de algunas instituciones que tienen que ver con la administración, la investigación y la justicia del país. Hay circunstancias dramáticas en donde la policía con muchos esfuerzos ha capturado a delincuentes y los jueces exigen evidencias más allá de las posibles. Nos enfrentamos con esos problemas todo el tiempo, pero no vamos a decaer en los esfuerzos porque

no queremos tener un escenario donde el Ecuador no controle territorio y nos ocurra lo que lamentablemente ocurre en Colombia.

Estamos haciendo un enorme esfuerzo por aumentar la presencia militar en la frontera norte, estamos en construcción de cinco unidades militares en la línea de la frontera y de unos diez destacamentos y unidades de la Policía Nacional también en la zona. La otra parte que tiene que ver con la presencia del Estado es evidentemente crear además del Consejo de Seguridad, las condiciones económicas para una reactivación económica legal de la población de la frontera. No puede haber políticas de desarrollo, seguridad y defensa adecuada, con una población marginada de los servicios básicos, desatendida por parte del Estado ecuatoriano. Seguridad y desarrollo van de la mano y esto ha sido una condición para la existencia pacífica del país. Ventajosamente en nuestro país no hemos tenido ni la experiencia de las FARC, ni de las autodefensas, ni de sendero luminoso y eso no es gratuito. Aquello tiene que ver con la realización de una serie de políticas públicas, de la reforma agraria, una política pública de tolerancia en el caso de los conflictos sociales, una manera de procesamiento de nuestras diferencias y conflictos que generalmente han estado alejados de los niveles de violencia de otros países de la región. Y eso es una cualidad importante del Ecuador, de un país que tiene posibilidades de procesamiento de sus diferencias de forma pacífica. Actualmente hay una serie de programas en los que esta empeñado el Estado que tienen que ver con lo que se denomina el Plan Ecuador que no es otra cosa que el denominativo de las inversiones públicas en la frontera norte. Hemos invertido, en los dos últimos años, cerca de doscientos millones de dólares en la frontera norte. En carreteras, puentes en la amazonía, en la zona fronteriza, en Esmeraldas, Borbón, Río Verde, Eloy Alfaro, San Lorenzo. El gobierno nacional está empeñado en corregir las inequidades, proteger la soberanía pero también en promover un desarrollo democrático equitativo para que todas las personas gocen de los beneficios de ciudades como Quito, Guayaquil, Riobamba, Ambato. De los mismos accesos a educación, salud, a la posibilidad de circular por la calle con algún nivel de seguridad.

#### MAPA DE LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR



\* Ministro de Seguridad interna y externa del Ecuador. El artículo es un condensado de su conferencia en el Seminario "Estrategias Nacionales de Seguridad. Quito, PUCE, junio 2009

## EL PROYECTO DEL GOBIERNO SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA NO ES DEMOCRÁTICO

**Dr. Juan Pablo Aguilar\***

Me pidieron que haga un comentario sobre el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado; me puse a analizar detenidamente el texto que se venía elaborando en el seno de la Comisión Legislativa de

la Asamblea Nacional, cuando de pronto me enteré que ese mismo día había llegado a la Comisión un nuevo proyecto preparado por la Función Ejecutiva, bastante diferente del anterior. Es posible que esto nos de la medida de la intensidad de las reformas que se quieren introducir, o de la angustia de ver que un tema que requiere una

profunda atención sea tratado tan rápidamente. Había anotado algunas observaciones sobre el proyecto de la Comisión legislativa. Pero las que encuentro en el nuevo texto del Ejecutivo, enviado tan abruptamente ya no tienen nada que ver con aquellas. Si bien ésta es una forma de simplificar el tema, habíamos entendido desde hace un tiempo que el problema consistía básicamente en pasar de la "conducción militar" de la seguridad, a la "conducción civil". Pero más allá de que quien conduzca la seguridad y la defensa, se trate o no de personal uniformado, el problema real es la conducción democrática señalada por la Constitución. Y tal como está el proyecto tengo mucha preocupación sobre su carácter democrático. Lo explico:

Primero, hay un tema que se refiere a la institucionalidad. Creo que a lo que se está apuntando actualmente es a cambiar la concepción que se tenía en la antigua ley de Seguridad Nacional. Había un Consejo de Seguridad Nacional controlado desde la visión militar, que planificaba una serie de temas del vivir nacional de acuerdo con esa visión. Obviamente, una visión así necesita una organización institucional propia. Pero estamos apreciando, al leer la Constitución, que el tema de la seguridad es un tema transversal que ocupa muchos espacios de la sociedad. La Constitución lo enuncia: defensa nacional, seguridad pública, protección sobre riesgos y desastres naturales, seguridad alimentaria, y propone una serie de fórmulas y conceptos para entender esta problemática de manera integral. En esa medida, teniendo una institucionalidad propia del Estado y sus instrumentos como las fuerzas armadas y la policía, extraña que no se haya pensado que lo que se requiere para una conducción democrática de la Seguridad es integrar desde el ejecutivo y potencializarlas, todas las sinergias disponibles para que esa institucionalidad del Estado dinamice las acciones, en función de los nuevos desafíos de la seguridad en el Ecuador. Todo ello en el marco de los conceptos de seguridad humana y seguridad jurídica incluidos en la Constitución. En lugar de ello, el proyecto del Ejecutivo se empeña en construir o mantener una institucionalidad paralela que no encaja en esta nueva visión de la seguridad.

Se propone un Consejo de Seguridad que no corresponde a la urgencia de la toma de decisiones y al emprendimiento de acciones necesarias en tiempo real. ¿Qué hace el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ante el problema de la gripe? Es fundamental entender de qué clase de temas de seguridad estamos hablando cuando se ha propuesto una Secretaría única de Inteligencia, desde la que se elabora un Plan Nacional de inteligencia que entre otras aspectos no guarda ninguna referencia con los objetivos del Estado y que además pretende "coadyuvar al desarrollo del país". ¿No es esto la misma y vieja Ley de Seguridad Nacional que desde hace tanto tiempo pretendemos cambiar?

La exposición de motivos nos muestra claramente qué es lo que está detrás. Ha dicho el Presidente de la República que la nueva Constitución del Ecuador exige cambios a la ley de Seguridad Nacional. Nosotros pensamos que la antigua Ley ya no es pertinente y lo que exige la Constitución es que modifiquemos sustancialmente el conjunto del tratamiento del esquema de la seguridad nacional en el Ecuador.

Hay un tema fundamental que tiene que ver con los Estados de Excepción. La Constitución no ha avanzado lo suficiente en este campo. Personalmente, habría preferido que volvámos a lo que existió en el país hasta que entró en vigencia la Ley de la Seguridad Nacional de la dictadura (1979). El concepto respecto a los estados de emergencia diferenciaba entre una emergencia por invasión de un ejército extranjero y una emergencia provocada por la erupción del volcán Tungurahua. No son lo mismo las amenazas de un grupo armado que ataca al gobierno, que las amenazas de un deslave en la vía a Chunchi. Sin embargo tanto la "antigua" ley de Seguridad Nacional como el nuevo proyecto del Ejecutivo conciben estas situaciones,

evidentemente distintas, de la misma manera, y a todo esto le da un enfoque de solución militar. Para que sea declarado un estado de emergencia, según la Constitución, se exige una serie de requisitos: tiene que cumplir con principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad. No cualquier situación es una emergencia. El proyecto que preparaba la Comisión de la Asamblea tenía por lo menos una buena definición de las situaciones que podían ser motivo de una declaratoria de esa naturaleza. La emergencia solo procede si el logro institucional no es capaz de responder a las amenazas contra la seguridad de las personas o del Estado y si se vive una situación excepcional, se justifica el uso de este instrumento extremo de seguridad.

Hace poco el Presidente de la República declaró en emergencia a PetroEcuador. ¿Es posible que los problemas de PetroEcuador hayan sido tan graves que no sean solucionables con los instrumentos normales del Estado de derecho? La Corte Constitucional ha dictado una sentencia en la que dice que el Presidente ha incumplido la Constitución porque ha emitido el texto correspondiente con tres días de retraso; sin embargo no ha dictaminado una nulidad de la declaratoria. Esto quiere decir que la propia Corte Constitucional admite el incumplimiento de la Constitución y, al contrario, ha justificado la declaratoria de emergencia sobre PetroEcuador. Los artículos pertinentes han sido eliminados en el proyecto del Ejecutivo porque con ello se quiere conseguir una mayor capacidad de juego en cuanto a la declaratoria de emergencia, y en cuanto a la posibilidad de manejar los instrumentos de la fuerza pública para fines políticos.

Lo que más preocupa es que un razonamiento semejante se aplique a la organización y funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia hablamos de un campo que se encuentra en los límites del derecho. Esta es un área de intervención extremadamente delicada, donde es fácil caer en situaciones que afectan a los derechos de las personas. El Estado de derecho se ha visto en la necesidad de "domar" al trabajo de inteligencia en procura de convertirlo en un sistema jurídico. Y tendrá que seguir en ese intento, al mismo tiempo sin entorpecer el trabajo de inteligencia. Este es el reto del Estado democrático; para lograr ese difícil equilibrio hace falta una ley. ¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo? Dice que todo el tema de la seguridad y la defensa serán manejados con un reglamento de esta ley. La Secretaría de Inteligencia que estará en manos del Presidente de la República regulará su funcionamiento. Esto es, en la práctica, un cambio de un uniformado por una persona de terno, nada más. Los pedidos de la Secretaría de Inteligencia para investigar a las personas no constarán en los registros de la función judicial. Una cosa es que sean reservados, otra cosa es que no haya rastro de lo que se está haciendo. Una conducción democrática exige que con documentos reservados y todo, nos quede constancia de lo que está pasando.

Las invasiones de un campo institucional sobre otro, se solucionan en el proyecto del Ejecutivo de un plumazo. Las infracciones a las órdenes de las autoridades de seguridad pública se sancionaran según el Art. 132 del código penal, con sanciones de 6 meses a 3 años de prisión. ¿Por qué?, por desobedecer órdenes, ¿qué órdenes?, de los agentes de seguridad ¿quiénes? Tenemos un tipo penal absolutamente abierto que ha de permitir que cualquiera, en cualquier momento, meta preso a 3 años de prisión a una persona por desobedecer una orden. A pretexto de decir que se está cambiando la conducción militar, por una conducción civil, lo que se está haciendo es sustituyendo una conducción militar que no fue democrática por una conducción civil autoritaria.

\* Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la PUCE. El artículo es la síntesis de su exposición en el Seminario Estrategias Nacionales de Seguridad. Quito, PUCE, junio 2009

# POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: SOBRE UN GOLPE DE ESTADO

**Leticia Salomón\***

## I. Un golpe anunciado

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares detuvo a Manuel Zelaya, Presidente de Honduras (2006-2010) y lo envió a Costa Rica, al igual que en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes militares. El detonante fue la convocatoria a una encuesta de opinión, promovida por el Presidente para consultar a la ciudadanía sobre la colocación de una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, con el fin de elaborar una nueva Constitución de la República.

El golpe de Estado se venía gestando, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre Legislativo y Judicial contra Ejecutivo. Los dos primeros desconocieron la decisión del Presidente Zelaya de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vázquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden suya, facultad establecida en la Constitución y enmarcada en la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del general en su cargo —en operaciones relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional—, constituyó un atentado a la independencia de poderes. La decisión de consumir el golpe de Estado se tomó ya el jueves 25 de junio. Pero lo hizo momentáneamente; además de la cautela del embajador de los Estados Unidos para apoyarla, la falta de una resolución por parte de la Comisión de Dictamen, conformada ad hoc a pedido del Presidente del Congreso, para declarar deshabilitado al Presidente de la República de continuar en su cargo.

La Constitución vigente data de 1982 y en ella no se contemplan mecanismos para revisarla y crear una nueva. Conscientes de las debilidades del sistema partidista tradicional, los constituyentes de la época establecieron algunos artículos denominados "pétreos" con la advertencia de penalizar cualquier intento de reformarla. En ese contexto, la iniciativa del Presidente Zelaya, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba reiteradamente que, en el pasado autoritario, una propuesta semejante llevaba implícito un golpe de Estado. Por ello, el intento del Presidente para realizar la consulta chocó con la oposición del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ambos intensificaron su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna.

## II. La alianza golpista (político-económica-mediática)

La coyuntura mostró la confluencia de intereses diversos:

**1. Intereses político-partidarios**, que aglutinaron a seguidores del titular del Congreso, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, resentido con Zelaya por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa de Zelaya como una amenaza al triunfo de su Partido; diputados de dos de los tres partidos pequeños y Democracia Cristiana, posicionados junto al presidente del Congreso en la confrontación de poderes (la excepción fue la izquierdista Unificación Democrática, con poca representación parlamentaria).

**2. Intereses político-institucionales, representados en:** a) *Corte Suprema de Justicia*, ocho de cuyos miembros son liberales, y siete del partido Nacional. Todos nombrados por el Congreso a

propuesta de una Junta Nominadora subordinada al partido que votó por ellos. b) *Ministerio Público*, dirigido por el Fiscal General, del partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos recién nombrados por el Congreso luego de fuertes negociaciones en las que Micheletti jugó un papel activo c) *Procuraduría General de la República*, liberal, nombrada por el Congreso, con fuerte dependencia de su partido d) *Comisión Nacional de los Derechos Humanos*, reelecto por el Congreso Nacional tras intensas negociaciones con el partido Liberal y e) *Tribunal Supremo Electoral*, organismo altamente partidizado cuyo presidente (Liberal) mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

**3. Intereses económicos**, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), todos disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial.

**4. Intereses mediáticos**, donde confluyeron los principales dueños de medios de comunicación a) **Rafael Ferrari**, liberal, dueño de canales de televisión y cadenas de radio, b) **Carlos Flores**, también liberal, ex presidente de Honduras, dueño de Diario La Tribuna, influyente en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso quien subió por amistad con Micheletti, entonces Presidente del Congreso. c) **Jorge Cañahuatti**, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, influyentes en la zona central, confrontado con el gobierno al quedar excluido de los contratos públicos. Dos años atrás el Presidente había señalado a los medios entre los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos.

## III. Los argumentos

**1. "El presidente quería imponer la democracia participativa".** La clase política, representada en el Congreso a través de los partidos actualmente constituidos, manifestó una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa.

**2. "El Presidente desobedeció las órdenes judiciales".** La insistencia del Presidente de la República con la idea de la cuarta urna, llevó al límite la confrontación entre poderes del Estado. Argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial. Este se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Legislativo y Ejecutivo. Lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que pudo resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político manejado públicamente como problema jurídico, aunque en privado, se manejó como un problema político.

**3. "El Presidente pretendía continuar en el poder".** El argumento del continuismo fue utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que plantaron la idea de que el presidente quería conti-



nuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. Declaraciones contradictorias de funcionarios allegados a Zelaya confundieron a los sectores en confrontación, hasta que el tema adquirió su propia dinámica a fuerza de repetirse en todos los niveles, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

**4. "El presidente quería instaurar el comunismo en el país".** La cercanía de Zelaya con los países del ALBA y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar las decisiones gubernamentales con su aspiración de instaurar el comunismo en el país. La situación fue hábilmente manipulada por los medios, repetida insistentemente por militares retirados y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. Estas estigmatizaron a los gobiernos y ciudadanos de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, hasta considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

#### IV. El papel de los militares

La alianza opositora realizó acercamientos al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República respecto a la encuesta de opinión en todo el país. Mientras negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de los ochenta, formados en plena guerra fría, quienes reafirmaron sus posiciones anticomunistas e incitaron a la insubordinación a los militares activos. Olvidados personajes se convirtieron en referentes notables de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, a favor y en contra.

Al momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y de su reconocimiento público en el Congreso como "héroe nacional", por haber desobedecido al Presidente, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas a los medios opositores, definiéndose del lado de la alianza golpista. La Junta de Comandantes, formada por los tres Jefes de fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido y ejecutando el golpe de Estado en la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y subordinación a los gobiernos legítimos fueron echados por la borda. Rencores particulares de los Comandantes los llevó a sucumbir ante el poder económico y político. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas habían logrado construir paso a paso una legitimidad social, y grados de aceptación similares a la Iglesia Católica. Verlos en la calle, golpeando a ciudadanos hondureños, ha sido un grave retroceso histórico.

#### V. Las contradicciones del Congreso Nacional

Lo ocurrido en el Congreso el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación de la democracia, los intereses personales, la ideologización del conflicto político y las rivalidades intra partidarias. Lo más lamentable ha sido la reproducción de los viejos métodos militares, mezcla de mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción de servicios, intento

de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación contradictoria como defensores de la nación.

#### VI. las debilidades generadoras de la crisis

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia:

**1. Politización partidaria de las instituciones.** Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza; pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía de los poderes han demostrado una fuerte debilidad aflorada en esta crisis con dimensiones profundas que deben llevar a la reflexión.

**2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo.** En los últimos años ha existido una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre todo cuando comienzan a definirse las pre candidaturas a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es la tendencia de los presidentes del Congreso Nacional a candidatizarse, lo que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. Han habido reformas constitucionales para impedir que estos hechos ocurrieran, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición constitucional.

**4. Recurrencia a poderes arbitrales.** Vinculado a lo anterior, por la gran debilidad del sistema político hondureño, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas ha sido la actitud histórica característica que ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado. Una nueva manifestación de esta tendencia es la recurrencia a las iglesias como factor arbitral, papel reñido con la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización.

**5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación.** Esta es una característica relativamente nueva del sistema político hondureño en la que han caído incluso las máximas autoridades del país. En la crisis actual la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas.

#### CONCLUSIÓN

Si no fuera por el drama provocado, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional a partir del viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando que lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, y no hay militares al frente de las instituciones del Estado. Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional.

# CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

**Paola Escobar Garzón\***

El Observatorio Político Defensa, Seguridad Pública y Ciudadana, da seguimiento a los acontecimientos más importantes que competen a las instituciones de DEFENSA Y SEGURIDAD (Fuerzas Armadas, Policía Nacional). En el período julio - agosto del 2009 resaltan cuatro temas principales de análisis e información.

## 1. POLICÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA

**Mayor número de armas en poder de civiles no es igual a mayor seguridad, sostiene Gustavo Jalkh.-** Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, manifestó que mayor número de armas en manos civiles no es igual a mayor seguridad. El Ministro anunció la intensificación de los operativos de control para identificar a civiles que porten armas y, además, detectar a quienes las posean sin los permisos correspondientes. DIARIO EL HOY, Quito, 01/07/09

**'Intocables' llegan con operativos a Guayaquil.-** Un grupo de policías con entrenamiento especial realiza operativos de impacto en zonas de alta peligrosidad. La estrategia es la sorpresa, llegar sin previo aviso a bares y centros de tolerancia y realizar una revisión exhaustiva a los ciudadanos que están en el lugar, para controlar la tenencia ilegal de armas y drogas e identificar a indocumentados y menores de edad. La idea, según el comandante provincial de la Policía, Juan Ruales, es reducir los índices delictivos y devolver a la ciudadanía la confianza en la Policía Nacional. DIARIO EL HOY, Quito, 01/07/09

**La pensión del policía disminuirá.-** La Superintendencia de Bancos y Seguros auditó al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Más de 2 000 retirados deberán devolver una parte de su pensión por existir una brecha presupuestaria pasó del rumor a los hechos. El Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) ahora exige a los pensionistas que devuelvan un porcentaje de su ingreso mensual para cubrir el déficit. EL COMERCIO, Quito, 13/07/09

**Mayor Silva presenta una acción de protección.-** El ex jefe de la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), Manuel Silva, planteará una acción de protección para evitar su baja de la institución. El Consejo de Generales de la Policía resolvió negar la apelación de la remoción de Silva por desertión. Según la resolución, Silva se ausentó de la Policía por más de 11 días, sin autorización para hacerlo. EL COMERCIO, Quito, 13/07/09

**Comisión de Angostura pidió a Correa dos meses más para presentación de informe.-** Los miembros de la Comisión, que investiga los pormenores del bombardeo en Angostura, se reunieron con el Primer Mandatario. Solicitaron más recursos para la contratación de personal. Francisco Huerta Montalvo indicó que el objetivo de la visita fue para pedir al Gobierno más apoyo económico "para la contratación de personal que es necesario", un plazo de dos meses adicional para la presentación del informe final y una cita adicional para la entrega de documentación por parte del Gobierno. EL COMERCIO, Quito, 13/07/09

**Ejecutivo asume la política de Seguridad y de Defensa.-** La Ley de Seguridad Pública y del Estado, aprobada ayer por el 'Congresillo' con 51 votos, ratifica al Ejecutivo la facultad de ejercer el control de la política de Seguridad y Defensa. Entre las principales novedades constan la creación del Consejo de

Seguridad Pública y del Estado, en reemplazo del COSENA; además de una Secretaría Nacional de Inteligencia, se incorporan mecanismos para regular la clasificación de la información reservada y se faculta a la Policía junto con las FFAA a participar en los estados de excepción. EL UNIVERSO, Guayaquil, 25/07/09

**Presidente Correa asume nuevo mandato y la presidencia pro t  pore de la Unasur.-** El presidente Rafael Correa se posesion   para un nuevo per  odo presidencial; al tiempo, recib   hoy de manos de la mandataria de Chile, Michelle Bachelet, la presidencia pro t  pore de la Uni  n de Naciones Suramericanas (Unasur), y asegur   que el organismo materializa la convicci  n de que la unidad de la regi  n es imprescindible para su desarrollo. EL HOY, Quito, 10/08/09

**Ministro de Defensa Ponce dijo que existe posibilidad de di  logo con Colombia.-** En entrevista desde Ecuador con la radio La W, Ponce se pregunt  : "  es que el gobierno colombiano necesita de las FARC para justificar toda la carrera armamentista?". Agreg   que esa es una "hip  tesis" que le "preocupa" y que hasta ahora no encuentra una repuesta para explicarse el incremento de la fuerza militar de Colombia en los   ltimos a  os. EL COMERCIO, Quito, 12/08/09.

**Colombia confirm   su asistencia a cita de presidentes de Unasur.-** El presidente colombiano,   lvaro Uribe, y su ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Berm  dez, estar  n presentes en cumbre extraordinaria de la Unasur, que se realizar   en Argentina y en la que se discutir   el acuerdo que estudian Bogot   y Washington para que   sta   ltima utilice siete bases militares. EL COMERCIO, Quito, 13/08/09

**Manuel Silva: 'terrorismo y narcotr  fico tambi  n invaden frontera sur de Ecuador'.-** Seg  n el ex jefe de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Manuel Silva, el territorio ecuatoriano ha servido de ruta de paso para el narcotr  fico (que viene desde Colombia) y ahora tambi  n alberga a elementos de organizaciones que apoyan esta actividad. Silva se refiri   a la presunta presencia de elementos de la guerrilla de las FARC en la frontera norte de Ecuador y habl   tambi  n de nuevas c  lulas del grupo insurgente peruano Sendero Luminoso al sur del pa  s. "En la parte norte tenemos a las FARC como un grupo terrorista de crimen organizado que cumple funciones del narcotr  fico. Y en el sur del pa  s grupos terroristas del 'neo' Sendero Luminoso, est  n apoyando actividades de narcotr  fico", destac   Silva. EL HOY, Quito, 20/08/09

**Ejecutivo veta Ley de Seguridad.-** La Asamblea Nacional dispone de un mes para pronunciarse sobre las 12 objeciones realizadas por el presidente Rafael Correa al proyecto de Ley de Seguridad P  blica y del Estado, que fue aprobado en segundo debate a finales de julio pasado. Uno de los reparos enviados por el Ejecutivo el 26 de agosto dice que la calidad de adscrita de la Secretar  a Nacional de Inteligencia al Ministerio de Coordinaci  n de Seguridad o quien haga sus veces, es incompatible con la naturaleza de los ministerios de coordinaci  n que carecen de entidades de este tipo. Por ello, elimina del articulado este planteamiento. EL HOY, QUITO 29/08/09

## 2. ASUNTOS DE DEFENSA Y MILITARES

**Las FFAA censan tierras de la frontera norte.-** Miembros del Ej  rcito realizan, desde el mes pasado, un registro de las tierras en las provincias de Sucumb  os, Orellana, Carchi y Esmeraldas.

La tarea se extenderá hasta mediados de agosto. EL COMERCIO, Quito, 13/07/09.

**Ecuador controlará con dos radares chinos frontera con Colombia.-** Ecuador dispondrá en tres meses de dos radares chinos para vigilar la frontera con Colombia, país con el que rompió relaciones diplomáticas hace poco más de un año por un ataque militar colombiano contra las FARC en su territorio, dijo hoy el ministro de Defensa, Javier Ponce. Quito también compró a Brasil 24 aviones Tucano de combate, helicópteros, aeronaves no tripuladas, lanchas rápidas y muelles flotantes para la lucha contra el narcotráfico y la migración clandestina en el mar y el control fronterizo. EL COMERCIO, Quito, 13/07/09

**FFAA hallan armas y refugios clandestinos en frontera.-** El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó ayer sobre la localización de varios refugios abandonados en la frontera norte y el hallazgo de varios pertrechos militares. Esos descubrimientos fueron reportados por la Fuerza de Tarea 1 Norte, que controla el cordón fronterizo. En uno de los operativos se detuvo a dos mujeres, que fueron puestas a órdenes de las autoridades civiles. DIARIO EL HOY, Quito, 01/08/09

**Rafael Correa ratificó a Varela en las FF.AA.-** El general Fabián Varela seguirá al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así lo anunció ayer el presidente Rafael Correa durante la ceremonia de ascenso de generales del Ejército. Varela tiene el rango de general de División. En el Ejército solo él y el comandante de la Fuerza Terrestre tienen esa jerarquía. Ellos deberán ser calificados para ascender el próximo año. EL COMERCIO, Quito, 08/08/09

**Ecuador presidirá el Consejo de Defensa.-** La principal diferencia la viven Ecuador, Venezuela y Colombia por la supuesta relación con las FARC y por el bombardeo a Angostura de 2008. Otro problema que enfrenta el Consejo es el histórico conflicto marítimo entre Perú y Chile, que se vio agravado la semana pasada por la denuncia de que ex oficiales de Inteligencia peruana espían a funcionarios chilenos. EL COMERCIO, Quito, 09/08/09.

**Una accidentada cumbre de UNASUR en Bariloche.-** Antes de que empezara la cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), se preveía que iba a tener complicaciones. Pretender que durara solo tres horas para tratar un tema complejo como la instalación de bases norteamericanas en Colombia resultaba una ilusión, tal como se demostró. Rafael Correa fue el del discurso más fuerte en la cita regional. Tuvo que dejar su posición de Presidente pro tempore de UNASUR para reivindicar la posición ecuatoriana. EL COMERCIO, QUITO 29/08/09

### 3. RELACIONES ECUADOR - COLOMBIA

**Comisión que investiga bombardeo en Angostura reclama que Colombia no entregue información.-** La Comisión de Transparencia ecuatoriana, que investiga el bombardeo colombiano en el territorio ecuatoriano de Angostura, lamentó que por el rompimiento de relaciones con Colombia, el Gobierno del país vecino no facilite la información completa relacionada con el mencionado hecho. "En todo caso tendremos contacto con otros sectores de Colombia en el ámbito de lo académico y en el de los medios de comunicación que tienen participación directa en la discusión de estos sucesos", manifestó Francisco Huerta, integrante del mencionado organismo. DIARIO EL HOY, Quito, 01/07/09.

**Colombia asume defensa de Juan Manuel Santos.-** Álvaro Uribe declaró hoy que Ecuador no tiene jurisdicción para apresar

al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. "Eso es una amenaza contra los colombianos", dijo Uribe tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. En un comunicado, Colombia expresó categóricamente la falta de jurisdicción en relación con la presunta responsabilidad individual y personal de cualquiera de los servidores o funcionarios que intervinieron en la acción. EL UNIVERSO, Guayaquil, 02/07/09.

**Ecuador pide a INTERPOL arresto de ex ministro de Colombia.-** La INTERPOL recibió hoy una orden de captura contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dictada por un juez ecuatoriano a raíz del ataque militar colombiano en Ecuador que dejó 25 muertos en marzo del 2008, informó un jefe policial. Sin embargo, el pedido de arresto contra Santos deberá ser calificado por la secretaría general de la INTERPOL. EL UNIVERSO, Guayaquil, 03/07/09.

**Carvajal: Orden contra Santos no es política sino jurídica.-** Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa, señaló esta mañana que la orden de prisión que dictó el juez primero de lo penal de Sucumbios, Daniel Méndez, en contra del ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, es un proceso judicial y tiene que ser resuelto en ese ámbito, y no en el político. Carvajal indicó que como el bombardeo del primero de marzo del 2008, en el que murieron más de veinte personas –incluyendo al número dos de las FARC, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Aisalla–, ocurrió en territorio ecuatoriano, está sujeto a las leyes y autoridades ecuatorianas. EL UNIVERSO, Guayaquil, 03/07/09.

**INTERPOL negó el pedido de captura a Juan Manuel Santos.-** La Policía de Ecuador recibió el comunicado oficial de la INTERPOL a las 15:00 de ayer. El Presidente colombiano dijo que Ecuador impulsa un golpe de Estado. El telegrama oficial llegó a la Dirección Nacional de la Policía Judicial de Ecuador a las 15:00 de ayer, 24 horas después de que se hizo el pedido. El titular de la institución, Rafael Yépez, dijo que esa decisión es inapelable y que "la Policía la respetará". EL COMERCIO, Quito, 05/07/09

**Las Águilas Negras se expanden.-** Águilas Negras es una organización de miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de grupos paramilitares. Así lo explicó Rafael Yépez, director general de la Policía Judicial, la semana anterior, tras la captura de Jackson P. y un menor de edad, que presuntamente pertenecen al grupo. El campo de acción de la banda de extorsionadores denominada Águilas Negras se estaría ampliado de Esmeraldas a otras dos provincias: Imbabura y Pichincha. EL COMERCIO, Quito, 06/07/09

**Conflicto armado en Colombia empuja a refugiados hacia Ecuador y Venezuela.-** El conflicto armado en Colombia desestabiliza las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela al tiempo que miles de colombianos huyen de su país en busca de refugio, afirmó un informe del grupo "Refugees International". De acuerdo con el grupo las amenazas de muerte, los asesinatos selectivos, los secuestros y las extorsiones aumentan en esas zonas fronterizas y afectan, también, a las comunidades que reciben el éxodo de colombianos. DIARIO EL HOY, Quito, 07/07/09

**'Mono Jojoy' habla de supuesto aporte a Correa.-** El Gobierno desestimó la denuncia de un supuesto aporte económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ayer, varios medios de comunicación e incluso el portal YouTube difundieron un video obtenido por la agencia Associated Press (AP), que muestra al número dos de las FARC, Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', hablando frente a un grupo de guerrilleros, mientras descansan en la selva. EL COMERCIO, Quito, 18/07/09

**Bases de EEUU en Colombia pondrán en juego estabilidad de la región: Carvajal.-** El Ministro de Seguridad ecuatoriano hizo estas declaraciones luego de que Venezuela anunciara que revisará las relaciones con Colombia al considerar una amenaza el acuerdo militar con Estados Unidos. "Aquí está en juego (...) no solamente el respeto al derecho internacional sino también la estabilidad de la región", manifestó el funcionario ecuatoriano luego de que Venezuela anunciara que revisará las relaciones con Colombia al considerar una amenaza el acuerdo militar con Estados Unidos. EL COMERCIO, Quito, 22/07/09

**Un coronel ecuatoriano es clave en la supuesta ayuda de las FARC.-** El coronel Brito pudiera esclarecer la veracidad del supuesto aporte de las FARC a la campaña del presidente Rafael Correa, en 2006. Tres presuntas cartas lo refieren. Son posibles comunicaciones entre Manuel Marulanda y Raúl Reyes, el líder histórico de la guerrilla y el número dos del grupo, quienes murieron en marzo de 2008. Allí se menciona que el Secretariado de las FARC decidió "ayudar a los amigos ecuatorianos" en octubre de 2006, cuando Correa estaba en campaña. EL COMERCIO, Quito, 23/07/09

**Correa advierte respuesta militar a Colombia si hay ataques.-** El presidente Rafael Correa advirtió que Ecuador responderá militarmente a Colombia si en el futuro ocurriera un episodio como el de marzo del 2008 cuando fuerzas colombianas atacaron un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. "Si Colombia nos agrede nuevamente, la respuesta será militar. Yo no permitiré un ultraje al territorio patrio como el que ocurrió el 1 de marzo de 2008", aseguró el mandatario ecuatoriano en entrevista con varios canales locales. EL COMERCIO, Quito, 27/07/09.

**Un mes después Correa acepta disculpas de Uribe y plantea a Colombia diálogo condicionado.-** El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aceptó hoy el pedido de perdón del gobierno colombiano y planteó un diálogo condicionado para retomar las relaciones diplomáticas bilaterales, rotas desde marzo de 2008 por una incursión militar contra las FARC en Ecuador. EL COMERCIO, Quito, 15/08/09

**Primer diálogo Ecuador-Colombia podría ser a nivel de cancilleres.-** Un primer diálogo entre Ecuador y Colombia para superar su crisis diplomática puede darse "a nivel de cancilleres" y, en caso de que persistan las diferencias, los gobiernos podrían acudir a una mediación internacional, planteó este martes el canciller de Quito, Fander Falconí. Según el ministro, este primer acercamiento sería "a nivel de cancilleres", aunque por el momento no se ha planteado una fecha o lugar de encuentro. EL HOY, Quito, 18/08/09.

**Siete puntos reglamentan el uso de bases militares colombianas.-** Al acuerdo para que tropas de EEUU utilicen siete bases colombianas solo le falta la formalidad de la firma de ambos gobiernos. Pero en los hechos, las Fuerzas Armadas de ambos países ya definieron las líneas maestras del convenio bilateral que regulará el uso de las instalaciones militares de Malambo, Apiay, Palanquero, Tolemaida y Lalandia, así como las naves de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico). EL COMERCIO, Quito, 21/08/09

#### 4. RELACIONES ECUADOR - CHINA

**China y Ecuador incrementarán cooperación militar.-** Los dos gobiernos acordaron, en una reunión en Beijing, incrementar su cooperación en materia militar, informó la agencia oficial Xinhua. El jefe del grupo de generales del Ejército de Liberación Popular (ELP), Chen Bingde, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el general Fabián Varela Moncayo, presidieron el encuentro. EL UNIVERSO, Guayaquil, 09/07/09.

Ecuador negocia con China compra de cuatro aviones logísticos para reemplazar parte de la flota aérea; la operación significaría unos 60 millones de dólares, dijo este jueves el Ministro de Defensa, Javier Ponce. La negociación forma parte de una estrategia de repotenciación del equipo militar emprendida desde el año pasado. EL UNIVERSO, Guayaquil, 30/07/09.

### CONVENIO PUCE - KAS



#### **BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA**

##### **Comité Editorial**

Bertha García Gallegos  
Francisco Rhon Dávila  
Juan Pablo Aguilar Andrade  
Raúl Benítez Manaut

##### **Asesoramiento Internacional**

Dr. Louis Goodman - American University (USA)  
Dr. Gustavo Suárez Pertierra - Real Instituto Elcano  
(España)

##### **Investigación**

Paola Escobar Garzón

#### **BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA**

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria  
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901  
Teléfonos:  
(593-2) 299 1582

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:  
e-mail: pfescobar@puce.edu.ec / bgarcia@puce.edu.ec